

EXPERTOS ASEGURAN QUE EL CÓDIGO DEL TRABAJO DEJA ABIERTA LA POSIBILIDAD PARA LA JURISDICCIÓN CIVIL

¿Quién debe resolver los conflictos entre los abogados y sus clientes?

BOGOTÁ. Aunque el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social indica que los conflictos por el reconocimiento y pago de honorarios por servicios personales de carácter privado -como los legales- son asuntos que debe resolver la jurisdicción laboral, en el gremio legal no es claro si esta disposición encierra litigios con distinta causa y hasta qué punto los jueces civiles también tienen competencia para ello.

Sobre estas incógnitas, LR consultó a laboralistas y civilistas, y las diferencias de criterios demuestran que hay cierta ambigüedad en la norma. "El debate", en opinión del especialista Carlos Javier Alzate, radica en que está redactado de una forma que induce no tanto a errores de interpretación, sino a que haya más de una opción de acceso y elección de la justicia.

El artículo segundo del Código Procesal del Trabajo o, Ley 712 de 2001, expresa: la Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, conoce de (numeral 1) los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.

Y en el numeral sexto, reglamenta que los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive.

"Para un abogado civilista es más fácil alegar el incumplimiento del contrato por parte de su cliente. Y un laboralista puede alegar que está determinado por la ley que los honorarios y su tasación están regulados por laborales. No son antagónicas, sino es cuestión de escogencia", agregó el experto laboralista.

¿CUESTIÓN DE CONVENIENCIA?

La posición de Rafael Bernal Gutiérrez, director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), es distinta. Aunque hasta ahora

EL DEBATE POR QUIÉN DIRIME LOS CONFLICTOS ABOGADOS-CLIENTES

La jurisdicción ordinaria Laboral y de Seguridad Social conoce entre otros temas:

Conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.



Conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive.

La jurisdicción Civil puede tener facultad, si:

La competencia es limitada:

Si la discusión es sobre la existencia de los honorarios y el contrato.

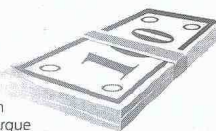
Hay incumplimiento del contrato por alguna de las partes, como:

Inducir al error al abogado.

No se dieron indicaciones de direcciones de testigos o estos no tienen conocimiento del proceso.

Se asimilan a un salario.

Los honorarios se regulan por naturaleza laboral porque son el sustento de un profesional.



Fuente: Ley 712 de 2001 / Sondeo LR

Gráfico: LR - AG



FRANCISCO GIL GÓMEZ
SOCIO DE ENFOQUE JURÍDICO

"Para mí la norma es clara. El conflicto surge porque la norma habla genéricamente del cobro de honorarios, pero no debería ser así porque si hay certeza de quien lo debe es competencia del laboral y si no del civil".

no han dirimido litigios por honorarios entre juristas y sus poderantes, sostiene que "hay una discusión" en torno a si los centros de arbitraje y los jueces civiles tienen igual competencia.

Bernal asegura que los jueces laborales "son muy celosos" en defender su autoridad en estos conflictos, con el argumento de la jurisprudencia que les entregaba facultades a ellos. Y debido a que la Corte Constitucional ya ha fijado una posición que igualmente está de su lado. "Me parece que es equivocado, pero es la regla".

El director del Centro de Arbitraje de la CCB sienta su posición en que dichas competencias "no tendrían" por qué ser exclu-

sivas del ámbito laboralista. No en vano, algunos centros lo hacen "a ciencia y paciencia" de que existe ese criterio en contra. Su argumento es que, "en teoría, finalmente el contrato entre un abogado y su cliente es de prestación de servicios, y en mi entender está regido por el Código Civil y no el Laboral".

La normativa, sin embargo, es clara para Francisco Gil Gómez, experto en temas civiles y comerciales de la firma antioqueña Enfoque Jurídico. El centro de la discusión para él son las razones por las que se enfrenten las partes: si los honorarios ya están pactados y el profesional pretende cobrar lo que adeuda su represen-



CARLOS JAVIER ALZATE
ABOGADO EXPERTO EN ASUNTOS LABORALES

"No hay claridad. Depende de la posición de la persona y cómo aspira a que se le resuelva el conflicto. Un civilista puede alegar incumplimiento de contrato; y un laboral, que lo determina el Código de Trabajo".

tado, la justicia competente es laboral. Si el enfrentamiento pasa por la causa y el precio, entonces debe acudir ante la civil.

"El conflicto surge porque la norma habla genéricamente del cobro de honorarios. La discusión se centra en si todo se refiere al cobro, pero si hay certeza de quién debe, es laboral; y si no la hay, civil".

Gil cita además que respecto a las facultades de las jurisdicciones laboral y civil en estos casos, se han planteado dos posiciones. Una, que su competencia de la primera obedece a que la mencionada Ley 712, que habla de reconocimiento y remuneración de servicios personales, sin hacer

diferencias. Y la otra, referente a una "competencia es limitada", cuando lo que motiva el litigio es la existencia de los honorarios y el contrato. De este modo, la competencia es para la segunda. "Argumentan para ello la existencia de incidente de regulación de honorarios, cuando media la revocatoria del poder, fijando el juez civil en este caso los honorarios correspondientes".

En lo que si coinciden los especialistas, es que lo mejor sería que las altas cortes fijen una posición que no deje lugar a ninguna duda.

GERMÁN CORCHO TRÓCHEZ
@CorchoAsuntosLR
#ConflictosAbogadosClientes

LA EXMINISTRA ASEGURÓ QUE DIRECTORIOS REGIONALES NO ACOMPAÑAN LA REELECCIÓN DE SANTOS

Ramírez, firme como candidata conservadora a la Presidencia

BOGOTÁ. La exministra Marta Lucía Ramírez, quien informó que haría una "declaración trascendental", reiteró que seguirá de precandidata por el Partido Conservador pese a que "el Presidente Santos, quien por intermedio de algunos emisarios, pretendía cancelar la convención".

Para Ramírez, el hecho de hacer la convención en enero es un triunfo de "las bases del partido y los conservadores que queremos tener la convención nacional para elegir candidato propio a la Presidencia de la República".

Asegura, además, que los directores de Antioquia, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, El Banco Magdalena, Norte de Santander, Cauca, Caldas, Meta, Bogotá,

Arauca, Huila, Bucaramanga, Guaviare y San Andrés, están unidos para pedir que haya candidato propio presidencial y no acompañar la reelección.

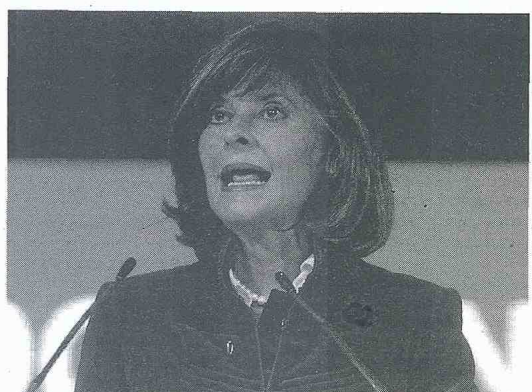
"Iremos a la convención representando los valores y banderas del Partido Conservador como son: seguridad, justicia, educación, industrialización, estado de derecho, familia, institucionalidad y desarrollo económico", indicó Ramírez.

También desmintió que esté pensando ser la candidata a la vicepresidencia de la República en la fórmula con Oscar Iván Zuluaga, del movimiento Uribe Centro Democrático.

De otra parte, una de las cabezas visibles del conservatismo, el líder gremial José Félix Lafau-

rie, le envió una carta de dos páginas dirigida a Omar Yepes, presidente del Directorio Nacional Conservador, en la que habló sobre las necesidades de la recuperación del campo, las políticas de seguridad democrática del ex presidente Uribe y las acciones del Gobierno en los asuntos referentes a la paz.

"Creí que podía ser útil al Partido en esta encrucijada, porque, para quienes, además de conservadores raizales, estamos comprometidos con el campo colombiano, resulta inaceptable que hoy, a instancias del narcoterrorismo, el Gobierno por fin haya reconocido que el campo está abandonado", escribió Lafaurie.



Marta Lucía Ramírez reiteró su postulación a la Presidencia de la República por el Partido Conservador, entidad que no ha decidido candidato.

COLPRENSA